



DECLARA LA PROCEDENCIA DE REALIZAR PROCESO DE CONSULTA INDÍGENA RESPECTO DE LA SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI – TEMUCO

RESOLUCIÓN (EXENTA) DGC N° _____/

SANTIAGO,

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N°21.044 de 2017, que Crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas en relación al Decreto con Fuerza de Ley N°850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas; en el artículo 6° N°1 letra a) y N°2 del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo, promulgado a través del Decreto Supremo N°236 de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores; en el Decreto Supremo N°66 de 2013, del actual Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que aprueba el Reglamento que regula el procedimiento de Consulta Indígena en virtud del artículo 6 N°1 letra a) y N°2 del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo y derogó normativa que indica (en adelante, Decreto Supremo N°66) y; en la Resolución N°36 de 2024, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

1. Que el Convenio N°169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio N°169), promulgado mediante el Decreto Supremo N°236 de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores, dispone en su artículo 2° N°1 que “[l]os gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”, y en su N°2 letra b), que “[e]sta acción deberá incluir medidas: b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones.”
2. Que el artículo 6 N°1 letra a) del Convenio N°169 dispone: “1. Al aplicar las disposiciones del Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Luego, en su N°2 establece que: “[l]as consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.”
3. Que, por su parte, el Decreto Supremo N°66 que aprobó el Reglamento que regula el procedimiento de Consulta Indígena, en virtud del artículo 6 N°1 letra a) y N°2 del citado Convenio N°169 y derogó normativa que indica, dispone en su artículo 2° que “la consulta es un deber de los órganos de la Administración del Estado y un derecho de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente por la adopción de medidas legislativas o administrativas, que se materializa a través de un procedimiento apropiado y de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas susceptibles de afectarlos directamente y que debe realizarse de conformidad a los principios recogidos en el Título II del mismo Reglamento.”

4. Que, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N°66, el proceso de consulta indígena comprende cinco etapas: (i) Planificación, (ii) Entrega de información y difusión, (iii) Deliberación interna de los pueblos indígenas, (iv) Diálogo, y (v) Sistematización, comunicación de resultados y término del proceso.
5. Que el inciso 1° del artículo 13 del Decreto Supremo N°66 dispone, a su vez, que “la consulta se realizará de oficio cada vez que el órgano responsable prevea la adopción de una medida susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas”. Agrega esta disposición que “[l]a decisión sobre la procedencia de realizar un proceso de consulta indígena deberá constar en una resolución dictada al efecto por el órgano responsable”.
6. Que, con la finalidad de determinar dicha procedencia, en el marco del “Estudio Integral de Concesión para la Ruta 5, Tramo Collipulli – Temuco”, adjudicado mediante Resolución DGC N°61 de 19 de agosto de 2022, se realizó un levantamiento de asuntos indígenas que analizó el territorio y las potenciales afectaciones para las comunidades indígenas en el área de influencia del proyecto, identificando antecedentes para determinar la necesidad de realizar una consulta indígena. Dicho levantamiento consta en el documento denominado “Informe de Levantamientos de Asuntos Indígenas, julio 2023”, el cual evidencia, en síntesis, que las comunas donde se desarrollará el proyecto presentan comunidades indígenas y tierras asociadas—principalmente a través de Títulos de Merced que incluyen derechos de agua—, por lo que es susceptible de generar cambios en las tradiciones, costumbres ancestrales y prácticas religiosas así como alteraciones en los sistemas de vida de dichas comunidades, especialmente en las zonas destinadas a la construcción de terceras pistas y el nuevo bypass Freire-Pitrufquén. En efecto, el informe destaca la presencia de comunidades indígenas en proximidad al tramo en estudio, así como la existencia de sitios de relevancia cultural donde se desarrollan actividades tradicionales. Asimismo, el informe identifica tierras indígenas en el área de influencia del proyecto—algunas de ellas colindantes con la actual Ruta 5—y se han detectado derechos de agua pertenecientes a estas comunidades que podrían verse afectados por las obras. De igual forma, se constató la presencia de patrimonio cultural indígena en la zona, con intervenciones planificadas en dichas áreas. Además, se identificó la existencia de un Área de Desarrollo Indígena (ADI) en el sector norte (ADI Ercilla).
7. Que, según consta en el Acta de Acuerdos de la Reunión N°35 de 8 de octubre de 2024, del Comité de Proyecto – DGC, el Comité concuerda con la pertinencia de realizar un proceso de Consulta Indígena respecto de la Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli – Temuco, del Ministerio de Obras Públicas, en virtud de los antecedentes contenidos en el informe y expuestos en la sesión.
8. Que, conforme al análisis de la información recabada, se considera que el decreto supremo que adjudique el contrato de la Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli – Temuco, es una medida administrativa susceptible de afectar directamente pueblos originarios del área de influencia, en los términos prescritos por el artículo 7° del Decreto Supremo N°66.
9. Que, por lo anterior, corresponde dictar el presente acto administrativo para declarar la procedencia de realizar un proceso de consulta indígena respecto de la medida ya señalada.

RESUELVO:

1° DECLÁRASE la procedencia de realizar un Proceso de Consulta previa a los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas, respecto de la Segunda Concesión Ruta 5 Tramo: Collipulli – Temuco.

2° COMUNÍQUESE la presente resolución a la SEREMI MOP de la Región de la Araucanía, a la División de Desarrollo y Licitación de Proyectos y a la División de Participación, Medio Ambiente y Territorio, ambas de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

Proceso N°19019308

-  ECQ
-  AGS
-  CMP
-  MIL
-  AMV
-  MPA
-  LQB
-  PVG
-  CAH

